



“Relativa estabilidad”

Pese a la situación estable de gran parte de los caladeros, 2005 no ha podido ser un año tranquilo debido a los precios de los carburantes, las campañas de imagen contra el arrastre o el súbito cierre de la pesquería de fletán en NAFO

Escribe **A. Cruces**

Si bien la “*estabilidad relativa*” sigue siendo condicionante y culpable de un reparto de posibilidades de pesca discriminatorio entre los estados de la UE, el juego de palabras del titular nos permite sintetizar un año, el 2005, en el que se confirma que son muchas las amenazas que penden sobre el sector pesquero y que no siempre dependen del estado de los stocks. Así, pese a la “*relativa estabilidad*” de caladeros tan importantes como Gran Sol o de las pesquerías de palangre, el año volvió a ser complicado. La confirmación de que ante la subida de los precios de los carburantes el sector se enfrenta a un problema estructural y no a un conflicto pasajero ha protagonizado la actualidad pesquera de 2005.

Si a ello unimos las dificultades con las que se enfrenta una buena parte del sector a la hora de controlar los precios en primera venta se puede justificar la vehemencia con la que se reclama ayuda institucional para hacer frente al problema.

2005 ha puesto de manifiesto una vez más que el principal problema del sector pesquero comunitario son los plazos. La realidad cambia a una velocidad imposible de seguir por las empresas. Si bien es cierto que, en un contexto de libre mercado, las empresas incapaces de adaptarse corren el riesgo de desaparecer, en el caso de la pesca hay que tener en cuenta que buena parte de la velocidad de los cambios viene impuesta por administraciones que interponen la rentabilidad política de una gestión basada exclusivamente en la protección del medioambiente a la responsabilidad de legislar teniendo en cuenta las consecuencias sociales y económicas. Es decir, que esas administraciones, y sobre todo la Comisión Europea, son las que tienen el pie en el acelerador y pueden controlar en buena medida la velocidad con la que se producen los cambios. Por eso su intervención e implicación en el futuro de las empresas es conveniente y necesaria.

Entre los muchos debates que quedan pendientes ante la vertiginosidad de los cambios se encuentra el de los modelos de gestión de pesquerías. Nadie hasta el momento ha tenido la valentía de presentar ante un estamento competente (desde la FAO hasta la Comisión Europea) el debate sobre cómo conviene aplicar el enfoque de precaución. Si bien la FAO ha formulado en el ámbito teórico la necesidad de tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales, la realidad es muy diferente. El peso de la opinión de los biólogos sigue eclipsando a la de economistas y otros profesionales, como los propios patronos, y la discusión final sigue estando en manos de políticos que defienden los intereses de sus estados.

Esta es la situación de caladeros tan importantes como NAFO, inmerso en un plan de recuperación que permite situaciones como la que este año provocó el cierre de la pesquería del fletán antes de que algunas empresas pudieran siquiera comenzar a pescar sus cuotas.

El sector, consciente de la necesidad de adaptación, ha seguido reclamando mayores y mejores esfuerzos en investigación. Siguió reclamando que la opinión de los profesionales de la pesca sea tenida en cuenta y, sobre todo, siguió exigiendo que, antes de tomar medidas, los políticos deben disponer de estudios rigurosos sobre las consecuencias sociales y económicas para lograr el doble objetivo de proteger al máximo los recursos y mantener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y de actividad económica.

En 2005, además, el sector profundizó en el concepto de “*pescas responsable*”, con iniciativas como la de autolimitar las capturas de gallo en Gran Sol, mantener las campañas para evitar capturas accidentales del palangre, o participar en programas europeos como el Equal a través del proyecto Sector Pesquero y Adaptabilidad (SEPYA). ↴

“RELATIVE STABILITY”

Although “relative stability” is still a conditioning factor responsible for a share-out of discriminatory possibilities of fishing among the EU states, the play on words leads us to sum up the year 2005 in terms of a number of threats hanging over the fishing sector, and not always depending on the state of the stocks. So despite “relative stability” of grounds as important as Grand Sole or the longliner fisheries, the year turned out complicated.

Confirmation that, due to the soaring fuel prices, the sector is facing a structural problem and not a passing conflict, has been the protagonist in fisheries news for 2005. If we add to this the difficulties shared by a fair part of the sector in controlling first sale prices, it is easy to understand the vehement call for institutional funding to deal with the problem. The year 2005 has, once again, underlined the fact that the main problem of the community fishing sector are the periods of time. Reality changes at a speed impossible to follow by companies. In other words, it is these administrations, especially the European Commission, that have their foot on the accelerator and are able to control the speed, to a good extent, with which the changes occur. One of the possible means of intervening is to fund fuel price increases. For this reason, their intervention and involvement in the future of companies is convenient and necessary, although it is not the only one. One of the ways in which they can intervene is to fund the increase in fuel

prices. But, however, that is not the only way. Among the many debates pending in view of the dizzying changes is the change in the models for managing fisheries. Nobody to date has been brave enough to present to a competent body (ranging from the FAO to the European Commission) the debate on how to apply the cautionary approach. Although the FAO, at theoretical level, has formulated the need to take into account the economic and social consequences, the reality is very different. The weight of opinion of the biologists continues to eclipse that of economists and other professionals, such as the skippers themselves, and the final discussion continues to be in the hands of the politicians who stand up for the interests of their own states. This is the situation of grounds as important as NAFO, plunged into a recovery plan that led, last year, to the closure of the Greenland halibut fishery before some companies were even able to start fishing quotas that had been legally assigned. The sector, aware of the need to adapt, has continued to call for greater and better research efforts. It carried on calling for the opinion of fisheries professionals to be taken into account when it came to managing and, above all, demanding that, prior to taking measures, the politicians should have rigorous studies available on the social and economic consequences. In this manner, it will be possible to attain the twofold objective of protecting the resources as much as possible and of maintaining as many jobs and economic activity as possible.